

RESOLUCIÓN

Ref.: C-494M-001-23
Exp.: A/SER-003525/2023

Unidad administrativa:
ÁREA DE CONTRATACIÓN

Resolución del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, por la que se dispone la imposición de una penalidad económica en el contrato titulado VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LA SEDE DONDE SE UBICA EL INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 3, apartado 1, del Decreto 213/1998, de 17 de diciembre (BOCM 4-1-99), del Consejo de Gobierno por el que se establecen medidas en la contratación administrativa de la Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo y demás disposiciones de aplicación, cumplidos los plazos de presentación de la documentación requerida a **SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX, S. A., (NIF: A06072979)**, sin que se haya aportado la misma, para poder comprobar el cumplimiento de la obligación de incorporar trabajadores con discapacidad en un 2% de la plantilla de la empresa, incoado procedimiento para la determinación de responsabilidades por incumplimiento de la citada obligación mediante Resolución de fecha 16 de mayo de 2025, y practicado el correspondiente trámite de audiencia,

RESUELVO

Imponer a la empresa SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX, S. A., (NIF: A06072979), adjudicataria del contrato titulado VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LA SEDE DONDE SE UBICA EL INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, una penalidad económica por importe de **1.419,22 euros**, según el cálculo indicado en la Resolución de incoación del procedimiento de la determinación de responsabilidades anteriormente citada, por el incumplimiento de la obligación de incorporar trabajadores con discapacidad en un 2% de la plantilla de la misma.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse con carácter potestativo recurso de reposición en el plazo un mes, ante el mismo órgano que lo ha dictado, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ambos plazos contados desde el día siguiente al de la recepción de la notificación, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente interponer. Todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; y artículos 8 a 12 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

LA GERENTE DEL INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO

Firmado digitalmente por: PARRA RUDILLA SILVIA MARINA
Fecha: 2025.07.02 18:12